



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DIECIOCHO LABORAL
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, once de agosto de dos mil veintitrés

RADICADO	050013105 018 2023 00062 00
DEMANDANTE	LUIS CARLOS GARCIA HINCAPIE
DEMANDADO	Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-
REFERENCIA	Auto libra mandamiento de pago

Tenido en cuenta la subsanación presentada por la parte ejecutante en respuesta a providencia del 12 de mayo de los corrientes, la cual fue presentada en termino oportuno, procede el Despacho a resolver la solicitud de librar mandamiento de pago.

El señor LUIS CARLOS GARCIA HINCAPIE, a través de apoderada judicial, presentó memorial, solicitando la ejecución a continuación de proceso ordinario, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, invocando como titulo la sentencia de primera instancia emitida por esta judicatura el 11 de mayo de 2021, confirmada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del H. Tribunal Superior de Medellín el 06 de octubre de 2022, pretendiendo que por medio del trámite de proceso ejecutivo laboral, se libere mandamiento de pago por todas y cada una de las condenas impuestas en el proceso ordinario 05001310501820190039700, así como por las costas procesales que se generan en el presente proceso.

Con base en lo expuesto, este Despacho presenta los siguientes,

ELEMENTOS FACTICOS

Mediante providencia proferida por esta dependencia judicial 11 de mayo de 2021, se dispuso:

“PRIMERO: SE CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES- COLPENSIONES a efectuar el reajuste de la pensión de vejez del señor LUIS CARLOS GARCÍA HINCAPIE, para lo cual deberá dar aplicación al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el decreto 758 de 1990, empleando una tasa de reemplazo de 78% sobre un IBL equivalente a 812.580, y una primera mesada pensional para el 1 de septiembre de 2006, equivalente a 633.812.

Por concepto de retroactivo pensional del reajuste de la prestación económica a partir del 30 de abril de 2016 y hasta el 30 de abril de 2021 la entidad de seguridad social deberá reconocer la suma de \$9.907.438, la cual deberá ser debidamente indexada conforme los parámetros indicados en la parte motiva.

A partir del 1 de mayo de 2021, deberá continuar reconociendo una mesada pensional de \$1.095.067, a razón de 14 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar.

De la suma reconocida por concepto de retroactivo pensional, se autoriza a la entidad de seguridad social a efectuar los reajustes de las sumas aducidas con destino al sistema de seguridad social integral.

SEGUNDO: SE DECLARA parcialmente probada la excepción de prescripción. Las demás quedaron resueltas en calidad de meras oposiciones en el contenido de la providencia.

TERCERO: SE CONDENA en costas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES por resultar vencida en juicio, fijándose como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.”

Decisión que fue confirmada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del H. Tribunal Superior de Medellín el 06 de octubre de 2022, sin costas en esa instancia.

Posteriormente, mediante providencia del 16 de mayo de los corrientes, se repuso el auto del 31 de enero de 2023 que liquidó y aprobó las costas y agencias en derecho, tasándolas en la suma de \$908.000 (f. 15 del proceso ordinario digital).

Así las cosas, la apoderada del ejecutante solicita librar mandamiento de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del CPTSS, artículo 306 del CGP y artículo 422 ibidem, de aplicación analógica al procedimiento laboral y de la seguridad social, igualmente solicitó se decrete la medida cautelar de embargo de los dineros que posea la entidad en las siguientes entidades bancarias: BANCO

BBVA, BANCO COOMEVA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE OCCIDENTE, y BANCO GNB SUDAMERIS.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver consiste en establecer si en el sub examine, existen las condiciones legales para considerar la presencia de título ejecutivo y en consecuencia proferir auto de apremio.

CONSIDERACIONES

El artículo 100 del CPTSS, posibilita la ejecución de las obligaciones originadas en relaciones sustanciales de índole laboral, cuyo soporte se plasme en un documento que emane del deudor, de su causante, o de decisión judicial y arbitral en firme.

Teniendo en cuenta la autorización de aplicación por remisión normativa de la normatividad adjetiva civil, autorizada en el artículo 145 del CPTSS, es necesario acudir a la regulación del artículo 422 del CGP sobre títulos ejecutivos, el cual reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”.

La claridad de la obligación, hace referencia a su determinación en el título, debiendo expresarse su valor, o los parámetros para liquidarla mediante una operación aritmética; la necesidad que la misma sea expresa implica que se advierta de manera nítida y delimitada; y finalmente que sea actualmente exigible, significa que es susceptible de ser cumplida por no estar sometida a plazo o condición.

La ejecución de condenas plasmadas en sentencias judiciales, encuentra regulación

especial en el artículo 306 del CGP, aplicable por remisión al procedimiento laboral y de la seguridad social, permitiendo incluso que la actuación de la parte ejecutante no sea necesariamente mediante la radicación de una demanda con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 25 del CPTSS, sino que es válido jurídicamente la presentación de una solicitud para proferir mandamiento de pago. En este contexto, el proceso ejecutivo ha de tramitarse a continuación del ordinario.

Igualmente, el artículo 305 del CGP, viabiliza la ejecución de las providencias a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso.

Sobre la medida cautelar de embargo, el artículo 228 de la Constitución Nacional establece que el libre acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental, cuyo núcleo esencial permite a los habitantes del territorio nacional ejercer su derecho de acción para solicitar ante las autoridades jurisdiccionales, tutela concreta de sus derechos. En éste contexto, las decisiones de los Jueces resultan de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios, en acatamiento del principio de la tutela jurisdiccional efectiva, razón por la cual, la legislación adjetiva en materia laboral y de la seguridad social, que en la mayoría de instituciones permite la aplicación analógica de las disposiciones del Código General del Proceso, prevé las facultades de ejecución cuando el acreedor tiene en su favor un derecho cierto plasmado en un título ejecutivo, proceso en el cual resulta viable jurídicamente el decreto y práctica de medidas cautelares cuya finalidad no es otra diferente que lograr el pago de los derechos que motivan el proceso; así se advierte en los artículos 588 y siguientes CGP.

Ahora, concretamente sobre los bienes inembargables, el artículo 594 del C. General del Proceso establece que son inembargables: “Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social”.

Frente a este punto, y del análisis sistemático de la normatividad aplicable, es claro que el artículo 1 del Decreto 4121 de 2011, dispone que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, para otorgar los derechos y beneficios de la seguridad social de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Nacional.

En torno a establecer si los recursos de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES constituyen rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación y los derechos de los órganos que lo conforman, que son inembargables según el mandato del artículo 594 del CGP y del artículo 19 del Decreto 111 del 5 de enero de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, es menester tener en cuenta la clasificación de cobertura prevista en el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que manda:

“ARTÍCULO 3º. Cobertura del estatuto. Consta de dos (2) niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional.

El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.

Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.

A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, se les aplicarán las normas que expresamente las mencione (L. 38/89, art. 2º; L. 179/94, art. 1º)”. (Subrayas fuera de texto original).

Según lo anterior, es claro que el mismo Estatuto Orgánico del Presupuesto manda que los recursos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no integran el Presupuesto Nacional.

Por su parte, el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 establece que son recursos inembargables los siguientes;

- “1.Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.
3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con solidaridad, y sus respectivos rendimientos.
4. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.
5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta ley, cualquiera que sea

su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

6. Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la presente ley.

7. Los recursos del fondo de solidaridad pensional.

PARÁGRAFO. No obstante, lo dispuesto en el presente artículo, las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos financieros sólo gozarán de los mismos beneficios que la ley concede a las cuentas de ahorro en UPAC, en términos de inembargabilidad”.

Sobre el particular, la Alta Corte entre otras, en sentencias C-546 de 1992, C-071 de 1993, C-103 de 1994, T-025 de 1995, C-354 de 1997, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, ha desarrollado una línea consolidada y pacífica en torno a las excepciones al principio de inembargabilidad, que se materializan precisamente cuando se advierte vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores y pensionados al mínimo vital, dignidad humana, seguridad social, y libre acceso a la administración de justicia.

Igualmente, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede constitucional, ha proferido una consolidada línea jurisprudencial en torno a las excepciones al principio de inembargabilidad, en lo referente al decreto y práctica de medidas cautelares que afectan los dineros destinados al pago de prestaciones del sistema general de pensiones, exponiendo entre otras en sentencia Nro. 51.755 del 22 de enero de 2014 SL 823 de 2014;

“Así las cosas, teniendo en cuenta la posición reiterada de esta Sala de Casación Laboral en relación a los ejecutivos laborales como consecuencia de una sentencia judicial que reconocen el derecho a la pensión, la cual dada la inembargabilidad de las cuentas del Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones se ocasiona la postergación indefinida del cumplimiento de la sentencia, vulnera los derechos fundamentales, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social”.

Ahora, respecto a la improcedencia de la aplicación del artículo 177 del C.C.A, hoy 192 del CPACA, en los procesos ejecutivos laborales, ha manifestado la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, entre otras, en sentencias Radicado Nro. 41.391 del 22 de enero de 2013, 30.656 del 30 de octubre de 2012, 39.575 del 22 de agosto de 2012 y 38.075 del 2 de mayo de 2012, emitidas por la H. Corte

Suprema de Justicia, sala de casación laboral, que para los procesos de ejecución en materia de derecho laboral y de la seguridad social, al no tratarse de una sentencia de naturaleza contenciosa administrativa no le resultan aplicables los términos del CPACA, toda vez que la remisión analógica normativa que autoriza el artículo 145 del CPTSS es frente a la regulación adjetiva civil y no la administrativa, sin que exista entonces fundamento jurídico para proceder con su aplicación en la materia.

Tesis que ha sido expuesta igualmente por el H. Tribunal Superior de Medellín, entre otras, en providencias del 15 de enero de 2013, Sala Primera de Decisión Laboral, M.P HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ; y del 17 de octubre de 2013, Sala Sexta de Decisión Laboral, M.P MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

De las piezas procesales allegadas al despacho y que obran en el expediente digital, se deduce una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma determinada de dinero a favor del aquí ejecutante y en contra de la ejecutada, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES–, quien obró como demandada en el proceso ordinario identificado con radicado Nro. 0500131050 18 2019 00397 00.

Esta dependencia judicial se dispuso a consultar el portal Banco Agrario con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación que recae sobre la entidad demandada, sin encontrar depósito judicial alguno correspondiente al valor de las costas del proceso ordinario que antecede.

Por lo anterior, debe colegir el despacho que se encuentran acreditadas las condiciones necesarias para librar mandamiento de pago en contra de COLPENSIONES, por no encontrarse cumplida la obligación contenida en la sentencia de primera instancia emitida por esta judicatura el 11 de mayo de 2021, confirmada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del H. Tribunal Superior de Medellín el 06 de octubre de 2022, por los siguientes conceptos:

- Por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$9.907.438) por concepto de retroactivo pensional del reajuste de la prestación económica a partir del 30 de abril de 2016 y hasta el 30 de abril de 2021, tal y como se ordenó en la

sentencia de primera instancia.

- Por las mesadas pensionales dejadas de percibir a partir del 1 de mayo de 2021, a razón de 14 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar.
- De la suma reconocida por concepto de retroactivo pensional, se autoriza a la entidad de seguridad social a efectuar los reajustes de las sumas aducidas con destino al sistema de seguridad social integral.
- Por la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS (\$908.000) por concepto de agencias en derecho de primera instancia.

Ahora, en lo que atañe a la medida cautelar deprecada, encuentra el Juzgado que la misma es procedente, con apego a las prescripciones del Art. 101 y 102 del Estatuto Procesal del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por los Art. 590 y ss. del Código General del Proceso. En tal virtud, se ordenará primeramente oficiar a las siguientes entidades bancarias: BANCO BBVA, BANCO COOMEVA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE OCCIDENTE, y BANCO GNB SUDAMERIS, para que certifiquen las cuentas que posee la ejecutada, ya que la parte actora no allegó los números de cuenta a los cuales desea aplicar la medida; así mismo, para que informen al Despacho la destinación de dichas cuentas argumentando las razones de su caracterización puesto que eventualmente podrían tener el carácter de inembargables. Una vez sea puesto en conocimiento de la parte ejecutante la respuesta proferida por las entidades bancarias, esta deberá indicar sobre qué cuentas recaerá la medida cautelar, presentando juramento de conformidad al art. 101 del CPTYSS y, de ser posible, el correspondiente certificado de habilitación de cuentas.

COSTAS PROCESO EJECUTIVO

Sobre las costas procesales, este Despacho hará un pronunciamiento expreso en el momento oportuno para ello.

Ésta providencia se notificará en estados a la parte ejecutante y personalmente a la ejecutada, en aplicación de los mandatos de los artículos 41 literal c) y parágrafo y

108 del CPTSS, norma especial que exige que la primera providencia del proceso ejecutivo, se notifique personalmente al polo pasivo de la relación procesal, para lo cual y al tratarse la ejecutada de una entidad de naturaleza pública, dicha notificación, se surtirá por aviso en los términos del parágrafo del artículo 41 ibidem, en consonancia con el artículo 612 del CGP.

Igualmente se notificará a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y a la PROCURADORA JUDICIAL EN LO LABORAL, por mandato de los artículos 610 y 612 de la Ley 1562 de 2012.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por la vía ejecutiva laboral, a favor de la señora LUIS CARLOS GARCIA HINCAPIE, y en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, por los siguientes conceptos:

- Por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$9.907.438) por concepto de retroactivo pensional del reajuste de la prestación económica a partir del 30 de abril de 2016 y hasta el 30 de abril de 2021, tal y como se ordenó en la sentencia de primera instancia.
- Por las mesadas pensionales dejadas de percibir a partir del 1 de mayo de 2021, a razón de 14 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar.
- De la suma reconocida por concepto de retroactivo pensional, se autoriza a la entidad de seguridad social a efectuar los reajustes de las sumas aducidas con destino al sistema de seguridad social integral.
- Por la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS (\$908.000) por concepto de agencias en derecho de primera instancia.

SEGUNDO. OFICIAR a las siguientes entidades bancarias: BANCO BBVA, BANCO COOMEVA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE OCCIDENTE, y BANCO GNB SUDAMERIS, para que certifiquen las cuentas que posee la ejecutada; así mismo, para que informen al Despacho la destinación de dichas cuentas argumentando las razones de su caracterización.

TERCERO. NOTIFICAR este auto por estados a la parte ejecutante, y personalmente a la ejecutada Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES-, advirtiéndole que dispone de un término de cinco (5) días para hacer el pago y diez (10) días para proponer excepciones.

CUARTO. ENTERAR a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 611 y el inciso 7º del artículo 612 del CGP

QUINTO. INFORMAR por secretaria de la existencia de la presente demanda al Procurador Judicial en lo Laboral.

NOTIFÍQUESE



ALBA MERY JARAMILLO MEJIA
JUEZA

JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN

Se notifica en estados N.º 137 del 14 de agosto
de 2023.

Ingrí Ramirez Isaza
Secretaria